

¿Existe en México mayor prioridad que la producción de alimentos?

Felipe Torres Torres*

Dentro del actual caos generalizado de la economía mexicana, profundizado por la inexplicable persistencia en la aplicación de un modelo de desarrollo que a nadie conviene, en la medida que se ha mostrado incapaz de corregir los desequilibrios internos, particularmente en lo que se refiere a la reactivación del aparato productivo y a una distribución menos polarizada del ingreso, la agricultura es, dentro de los sectores productivos, la que resiente los peores efectos.

Tal condición, tipificada hace ya más de una década como un "gran desastre agrícola nacional", ha generado que sea el primer sector donde instancias gubernamentales superiores reconocen el fracaso del modelo neoliberal y la necesidad de otorgar a la producción agrícola un tratamiento diferente en el contexto del desarrollo, de los criterios que impone la modernización, las libres fuerzas del mercado y la apertura comercial de hoy.

La producción agrícola, independientemente del modelo bajo el que se desenvuelva, es de importancia estratégica para el país. Si bien la rentabilidad alcanzada no puede compararse con otras ramas de la economía, y de aquí la razón de los esquemas proteccionistas adoptados por los países en la producción de alimentos, fortalece el desarrollo económico independiente como proveedora de materias primas en casi todas las cadenas productivas y, lo de mayor importancia, es indispensable para la reproducción social. De esa manera, en los últimos 50 años se erige como un factor de control fundamental en la geoestrategia mundial: si se controla la producción y el comercio de alimentos, se controlan más fácilmente las economías nacionales e incluso la propia soberanía de los países que

* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

carecen de una agricultura fuerte y por lo tanto tienen necesidad de importar alimentos.

Al contrario de la función estratégica que le confieren los países líderes, la agricultura en México ha sido concebida durante las tres últimas décadas, más como un sector de extracción que de inversión y desarrollo a largo plazo. Dicha concepción ha repercutido en los más bajos niveles de producción, la más profunda descapitalización y la más lacerante marginación económica y social apenas mediatizada por breves espejismos de recuperación; por tanto se encuentra ya en el umbral de pagar las más severas consecuencias internas de esa desatención.

La agricultura en general está asociada a factores de riesgo (sequías, inundaciones, plagas, enfermedades, etc.) que la hacen especialmente vulnerable, lo cual no es característico de otros sectores productivos; a ello se suman fluctuaciones marcadas en los precios, una vida más corta en el almacenamiento de productos y la incorporación más lenta de tecnología. Así, la competitividad de los productores sólo se alcanza si existe un fuerte apoyo estatal a través de créditos blandos, subsidios a la producción y al comercio y una clara definición de prioridades en cuanto al fortalecimiento de los productores y la satisfacción del consumo interno. De otra manera, es casi seguro que los productores abandonen tarde o temprano el campo y conviertan a la agricultura en el factor de mayor vulnerabilidad de la economía.

La agricultura mexicana enfrenta hoy de manera adversa y en diferentes gradientes, todos y cada uno de los factores arriba señalados. A pesar de las fuertes tendencias proteccionistas de las principales potencias agrícolas mundiales, en México, ante la necedad de no entender ese carácter económico diferente de la agricultura y la proclividad a llevar el modelo de desarrollo en boga hasta sus últimas consecuencias, se ha optado por eliminar los subsidios a grado tal de convertirlos en "bonos de ayuda" propiciados por las graves desigualdades en la relación costo-precio; la política de créditos que durante largo tiempo ayudó a garantizar una relativa autosuficiencia en granos básicos, ante su abandono, se ha traducido hoy en un fuerte detonante social propiciado por el crecimiento exponen-

cial de las carteras vencidas que convierten en inviable cualquier esquema de producción agrícola; la política interna de precios que ha tenido un comportamiento errático y con marcadas tendencias recientes a privilegiar el esquema de ventajas comparativas, hoy se enfrenta a un repunte de los precios internacionales, a lo cual se suma la caída de la producción, la debilidad de la moneda, el problema de nuevo galopante de la deuda externa, la incapacidad de mejorar los niveles internos de precios agrícolas porque contravienen la estrategia de control de la inflación; asimismo, se registran niveles de migración sin precedentes de campesinos, de tal manera que extensas regiones del país son inviables de incorporar a un esquema de recuperación agrícola nacional ante la carencia de mano de obra.

Una de las causas que han propiciado el abandono del campo es el encarecimiento, según estimaciones, de entre el 70 y 75% del costo de la vida en zonas rurales, situación que ha empeorado en los últimos meses. Ello ha contribuido a un abandono de tierras en ascenso, de tal manera que se calcula que de 1993 a la fecha se han dejado de cultivar alrededor de dos millones de hectáreas tan solo asociados a factores de emigración y falta de rentabilidad. En estas condiciones es evidente que fracasen políticas de reactivación agrícola por la vía de las exportaciones en la medida que la mayoría de los productores están marginados de antemano de sus posibles beneficios.

De cualquier manera otras medidas que consideran tomar en cuenta el mayor flujo de recursos a través del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) como forma de recuperar los niveles de producción muestran limitaciones evidentes. Se calcula que actualmente se destinaría un presupuesto de poco más de 17 000 millones de pesos al desarrollo rural cuando la dimensión de necesidades reales demandan un apoyo que rebasan los 35 000 millones de pesos.

Si bien es cierto que el Ejecutivo Federal denunció recientemente las condiciones lacerantes del campo y estableció el compromiso de un mayor flujo de recursos, para apoyar la producción otros actores señalan la debilidad de su propuesta frente a la realidad. Un documento de evaluación de Procampo señala que este programa registrará un declive de entre 42 y 47% respecto a 1994, lo cual obligó a una depuración de pro-

ductores elegibles para obtener beneficios del programa y una reducción del 10.7% de la superficie pagada. Los apoyos de \$440 por hectárea representan una disminución del 20% con respecto a 1995. Estos apoyos, de por sí insuficientes, lo son aún más en un contexto de liberación de los mercados agrícolas y de la fuerte competencia por la vía de los costos frente a países más fuertes.

Una de las repercusiones inmediatas del abandono al campo se resiente hoy más debido a la fuerte tendencia a la alza de los principales granos básicos; la política de ventajas comparativas, asociada al hecho de otorgar mayor prioridad a una estrategia exportadora de la agricultura, muestra un agotamiento evidente. Se calcula en diferentes instancias públicas y privadas que para 1996 se importarán cuando menos 9 millones de toneladas de granos básicos que significarán más de 2 300 millones de dólares, lo cual se ve especialmente complicado por los problemas de liquidez interna y la fuerte presión de la deuda externa.

La situación es especialmente complicada en el renglón maíz donde las importaciones alcanzarían entre 4 y 5 millones de toneladas. El precio interno del maíz se ubica actualmente entre 1 600 y 1 700 pesos y el internacional entre 160 y 180 dólares, (200 dólares puesto en México) a diferencia de hace unos meses cuando no sobrepasaba los 130 dólares por tonelada. Estos precios pueden repuntar aun más si tomamos en cuenta algunas estimaciones que señalan una declinación del 10% de la producción a nivel mundial para este año, la baja sistemática de las reservas internacionales y la reaparición del problemas de la sequía en diversas regiones del planeta; junto con la tendencia constante hacia el incremento de las demandas internacionales de granos.

La sequía es otro de los grandes problemas que afecta la producción interna de granos y vulnera en grado extremo la soberanía alimentaria nacional. Tal fenómeno, que afecta de manera más aguda al norte del país, pero que se presenta en prácticamente todas las regiones de México, redujo ya la disponibilidad nacional de granos, según datos oficiales, en más de 20% para 1996 y 50% en comparación con años anteriores. De persistir la sequía dejarían de sembrarse alrededor de

500 000 hectáreas en el ciclo primavera-verano; sumadas a 229 000 que quedaron sin sembrar en el ciclo otoño-invierno. Si bien en este sentido interviene un fenómeno natural de carácter incontrollable en el abatimiento de la producción interna que encarecerá a niveles sin precedentes los precios rurales de granos, las repercusiones bien podrían ser atenuadas de existir programas planeados que consideren la constitución de una *reserva estratégica de alimentos* para enfrentar contingencias ambientales.

Evidentemente que el principal beneficiario del problema estructural de la agricultura mexicana y del fenómeno de la sequía interna es Estados Unidos. Ante el incremento de más del 70% del precio internacional del maíz, ese país espera cosechar 235 millones de toneladas del grano para este año, lo cual, a pesar de las leves restricciones formales del Tratado de Libre Comercio (TLC) a la importación del maíz, en un contexto de escasez, no le será difícil colocar el volumen que se demande pero que además puede estar agravado con chantajes políticos que condicionen dicha venta ante el incremento de la demanda mundial.

La *vulnerabilidad alimentaria* no es un concepto teórico, representa la debilidad para satisfacer nuestras propias necesidades que arrastrarían inevitablemente hacia el hambre abierta a millones de mexicanos, lo cual resulta inaceptable cuando contamos con todas las condiciones naturales y humanas no sólo para garantizar la soberanía alimentaria interna, sino incluso para competir mediante la aplicación de un esquema de desarrollo más racional y potencializando nuestras condiciones específicas de país.

Existen propuestas de diversa índole para resolver el problema de la vulnerabilidad interna de la producción de alimentos, aún considerando la cuestión cíclica recurrente de la sequía; incluso se han diseñado estrategias tecnológicas realistas, el problema es de voluntad política para aplicarlas y de reconocer al campo no como espacio de control político, sino como agente del desarrollo económico. De cualquier manera los puntos básicos que a nuestro juicio se deben considerar en una estrategia actual de reactivación agrícola son: a) manejo del crédito agrícola con criterios sociales y considerando una estra-

tegia de reactivación del mercado interno; b) revisión de la política interna de precios, independientemente de las fluctuaciones del mercado internacional y del TLC; c) revisar la política de subsidios al campo, considerando las estrategias proteccionistas mundiales y d) privilegiar una política de precios, desarrollo tecnológico, comercialización y abasto e infraestructura a partir de la heterogeneidad regional del país.